

ELIZONDO MAYER-SERRA



Pagar por que otros se manifiesten es viejo deporte nacional. Ya aprendieron los narcos a utilizar ese mercado.

Blindar manifestaciones

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA

Para proteger a la política del narco hemos supuestamente blindado las elecciones. Me parece un blindaje poroso, pero ojalá esté equivocado y podamos transitar las elecciones sin que el dinero del narco se meta en el proceso financiando campañas.

Sin embargo, lo que se debe blindar es la actividad política en su conjunto. En particular una de sus caras más visibles: las movilizaciones que piden algo bloqueando las vías de comunicación. Se trata de un negocio redondo, porque por lo menos se obtiene publicidad gratis, aunque en general, el manifestante se lleva dinero y otros beneficios. Para partidos políticos en elecciones competidas, poder movilizar a electores adicionales puede hacer la diferencia. Por ello, la capacidad de movilización del PRI es una ventaja en una elección con alta abstención como suelen ser las intermedias. Por eso el PAN en Nuevo León sigue cortejando a Elba Esther Gordillo.

Los narcos, para enfrentar la guerra en su contra, han ido aprendiendo a comprar cada vez más cosas con su dinero. Como es bien sabido, en México un servicio disponible en el mercado es el de acarreo de manifestantes. "Usted nos dice dónde, nosotros le llevamos a la gente," podría ser el lema de cualquiera de las "empresas" que se dedican a esto, si optaran por la publicidad formal.

Hemos construido unos estándares morales laxos que permiten a cualquiera con una supuesta buena causa bloquear un camino, carretera, puente o edificio público. Es fácil vender casi cualquier causa como buena. Es cuestión de adornarla. Los pobres siempre tienen alguna demanda legítima y el concepto de pobres es bastante elástico. Basta ver a quienes protestan muchas veces contra los cambios en las reglas del ejercicio del gasto en el campo. Hay pobres campesinos inscritos a

Procampo y a Ingreso Objetivo, dos de los principales programas para dirigir recursos al campo, que han recibido de 1994 al 2008 una fortuna. El más necesitado aparentemente es Manuel Murua, de Sociedad de Solidaridad Social, quien ha recibido 73 millones de pesos. (Véase el excelente sitio http://subsidiocalcampo.org.mx/top_recips.php?fips=F0000000&progcode=XXXX para mayores sorpresas).

Tenemos un sistema político acostumbrado a tolerar y negociar con marchas de todos tipos. Amparados en el artículo nueve de la Constitución argumentan que, "no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito" pero olvidan la parte final de este mismo artículo. "... si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciera uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee".

La izquierda, y crecientemente el PRI, han hecho legítima la industria de la marcha y casi un tercio de la población no cree que se deba usar la fuerza pública en su contra jamás, sin importar qué estén haciendo. Para la autoridad responsable de mantener abiertas las vías de comunicación, utilizar la fuerza pública es arriesgado. Suele ser más barato negociar, ceder, dejarlos que se queden con la calle. En los casos extremos donde han buscado desalojarlos casi siempre termina mal, con heridos, vejados y hasta muertos. Nuestras fuerzas de seguridad están mal entrenadas para enfrentar a manifestantes violentos acostumbrados a maltratar a las fuerzas del orden sin pagar costo alguno, pero sus responsables no han hecho nada para castigar a quienes en el camino abusan de los legítimos derechos de los manifestantes.

Nos ha terminado por parecer normal que unos manifestantes de origen po-



Fecha 20.02.2009	Sección Primera - Opinión	Página 19
---------------------	------------------------------	--------------

co claro puedan vivir sin trabajar porque su trabajo es marchar. Por eso sobreviven meses paristas a sueldo acampando frente a las oficinas del ISSSTE o marchando desnudos en Paseo de la Reforma. Ahora nos estamos enfrentando a una faceta distinta del mismo fenómeno: marchistas “tapados”. Probablemente la idea de taparse la cara está inspirada en el subcomandante Marcos y sus seguidores. En este caso, sin embargo, son presuntamente organizados por el narco y usan los “legítimos” instrumentos de la política nacional para pedir que se retire el Ejército.

La justificación puede pasar por noble, ya que dicen ser maltratados por la fuerza pública, que en más de una ocasión actúa excediéndose. Sin embargo, parece tan evidente el que están detrás de ellos los narcos, que no ha salido, todavía, ninguna fuerza política legal dispuesta a defenderlos. Sin embargo, tampoco se atrevieron los gobiernos locales afectados a hacer gran cosa. La autoridad local no parece estar preparada para enfrentarlos, salvo que haya visita del Presidente, como la hubo el miércoles en Monterrey, día en que no se vieron “tapados”.

Cuando la política transita por la ilegalidad, como es el caso de las marchas que bloquean vías de comunicación o la entrada a un edificio, es más fácilmente capturable por quienes viven fuera de la legalidad y cuentan con grandes cantidades de efectivo. Se requiere una respuesta contundente de todos los actores políticos para asegurarse que el dinero no manipule marchas espurias, para asegurar que sólo se manifiesten quienes tienen intereses legítimos (y sin afectar a terceros), pero más de uno puede dudar de actuar, por sentir atenta contra sus propios intereses de corto plazo.

Correo electrónico: elizondoms@yahoo.com.mx